

AUTORITARISMO Y ALTERNATIVAS POPULARES EN AMERICA LATINA

Daniel Camacho — Norbert Lechner
José Joaquín Brunner — Angel Flisfisch
Manuel Antonio Garreton — Tomás Moulian
Augusto Varas — Carlos Portales

Edición: Francisco Rojas Aravena



ediciones
FLACSO

colección 25 aniversario
San José, Costa Rica, 1982

Primera Edición:
Ediciones FLACSO
Diciembre de 1982

© Ediciones FLACSO

Este libro es editado por la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Las opiniones que en los artículos se presentan, así como los análisis e interpretaciones que en ellos se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Facultad.

321.9
A939a

Autoritarismo y alternativas populares en América Latina / Daniel Camacho (y otros). -- Ediciones FLACSO a cargo de Francisco Rojas Aravena. -- San José, C.R. : EUNED, 1982. 220p. (Colección 25 aniversario)

ISBN: 84-89401-01-2

1. América Latina - Política. 2. Democracia. 3. Conservadurismo. 4. Chile - Condiciones sociales. 5. Ciencias sociales.



Impreso en Costa Rica
en los Talleres Gráficos de la Editorial EUNED
Reservados todos los derechos
Prohibida la reproducción total o parcial
Hecho el depósito de ley

CONTENIDO

<i>PREÁMBULO</i>	7
<i>PRESENTACIÓN</i>	9
 Introducción: El Pensamiento Sociológico y la Realidad Latinoamericana DANIEL CAMACHO	 13
 El Proyecto Neoconservador y la Democracia NORBERT LECHNER	 23
 Ideología, Legitimación y Disciplinamiento: Nueve Argumentos JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER	 71
 La Polis Censitaria: La Política y el Mercado ANGEL FLISFISCH	 107
 Transformación Social y Refundación Política en el Capitalismo Autoritario MANUEL ANTONIO GARRETON	 141
 Dictaduras Hegemonizantes y Alternativas Populares TOMÁS MOULIAN	 159
 Crisis Política y Alternativas Democráticas: Límites y Perspectivas de la Izquierda Chilena AUGUSTO VARAS	 181
 La Izquierda y la Alternativa Democrática CARLOS PORTALES	 203

CRISIS POLÍTICA
Y ALTERNATIVAS
DEMOCRÁTICAS:
LÍMITES Y PERSPECTIVAS
DE LA IZQUIERDA
CHILENA

Augusto Varas

INTRODUCCION

La situación creada con posterioridad al plebiscito constitucional de 1980 ha puesto en evidencia una crisis política de arrastre. Esta se expresa en la incapacidad de los principales elementos de la política nacional para establecer alianzas de largo plazo y dirigir hegemonícamente la sociedad chilena.

La proposición de un gobierno cívico-militar realizada en un contexto de unidad opositora, no tuvo los resultados esperados por algunos, no sólo en las urnas sino principalmente en el interior de las fuerzas de apoyo al gobierno. Los sectores empresariales, los oficiales superiores de las fuerzas armadas y del Cuerpo de Carabineros, la alta tecnocracia gubernamental y los diversos sectores de opinión que influyen en las decisiones gubernamentales no alteraron su opción de mantenerse unidos. La propuesta mencionada no cambió las bases del acuerdo mínimo que aún los fundamenta.

Crisis de arrastre puesto que con posterioridad al fracaso del proyecto hegemónico del empresariado industrial —sintetizado en la industrialización sustitutiva más actividad económica estatal implementada desde 1938 hasta 1973— no ha sido posible resolver el principal problema político nacional: el sistema de alianzas políticas y de clases apto para darle curso a tal estrategia de desarrollo.

Si bien los gobiernos radicales hasta Juan Antonio Ríos lograron establecer una cierta simetría entre el proyecto de desarrollo, la alianza de clases que lo fundamentaba y los acuerdos políticos que la formalizaban, no sucedió lo mismo desde la administración de Gabriel González.

Las diferencias entre los gobiernos de Ibáñez, Alessandri, Frei y Allende, entre muchas otras, radicaron en las alianzas

políticas y de clase que cada uno intentó para impulsar una misma estrategia de desarrollo nacional. Sus principales limitaciones fueron las comunes incapacidades para estabilizar un determinado *acuerdo político* que diera cuenta de aquella alianza de clases que iba a ser soporte de la estrategia de desarrollo a largo plazo.

Indudablemente cada gobierno a partir de 1946 intentó alianzas y acuerdos que favorecían a uno u otro sector de manera diferencial. Sin embargo, sus principales limitaciones no radicaron solamente en los diferentes elementos convocados para su gestión, sino en la común incapacidad para darle forma y estabilidad a tales alianzas políticas articulándolas como proyecto hegemónico sobre el conjunto de la sociedad.

Este aspecto de la crisis hegemónica cuyos rasgos centrales hemos resumido, no logra resolverse después de siete años de gobierno militar. Ello impactará profundamente en la estructura y en los procesos políticos que se vivirán bajo el régimen militar y al mismo tiempo condicionarán las características del enfrentamiento político durante esta fase.

Los principales elementos que caracterizan esta crisis son: la incapacidad de una alianza hegemónica al interior del bloque dominante; las dificultades de una alianza y acuerdo político al interior de la Oposición; la reiteración de errores históricos en el seno de la Izquierda y, en consecuencia, su neutralización como elemento privilegiado de la lucha política nacional.

Todo ello tiene como expresión un enfrentamiento político en cámara lenta que no puede proyectarse ni como total consolidación del régimen y de sus transformaciones, como tampoco se puede traducir en su sustitución.

LAS CONTRADICCIONES EN EL INTERIOR DEL BLOQUE DOMINANTE

La amplia alianza política y de clases que dio por tierra con el proyecto de la UP presenta sus primeras dificultades recién inaugurado el gobierno militar. Expresión de ello son sus vacilaciones iniciales —especialmente entre 1973/1975— para impulsar un proyecto claramente reconocido por su coherencia y perspectiva de transformaciones profundas.

No es casualidad que las principales “modernizaciones” sean efectivamente iniciadas solamente en 1978 después de la formulación de un plan de estabilización política, i.e. Chacarillas. A pesar de las apariencias, el “modelo” tanto en sus as-

pectos económicos —quizás los más elaborados con anterioridad— como sociales y políticos, no estaba formulado. Junto a esta precariedad del proyecto no existía consenso en el interior de las fuerzas del bloque de poder emergente acerca del tipo de transformaciones a ser impulsadas. Ejemplo de ello es el “populismo” pasajero del Gral. Bonilla o los esbozos corporativistas de otros personeros.

El proyecto más elaborado de institucionalidad política y de modernizaciones sectoriales se abre paso cuando son *políticamente* derrotadas en el interior del gobierno las posiciones de corte estatistas. En este sector derrotado habían convergido viejos estanqueros y nacionalsocialistas de diversas épocas hasta miembros de las FF.AA. que implementando una política represiva intentan estabilizar un régimen militar *tout court*. Solamente después de esta clarificación en el interior de las fuerzas gobiernistas se abre paso un proyecto coherente que intenta integrar el conjunto de cambios parciales en el interior de un proyecto de largo plazo.

De esta forma en el campo laboral, por ejemplo, los intentos iniciales de un diálogo con sectores trabajadores y el esfuerzo posterior de desarrollar una fuerza sindical propia, deja paso al nuevo Plan Laboral que modifica sustancialmente la realidad sindical y gremial del país. Igualmente, por primera vez se estabilizan las iniciativas en el campo educacional, de la vivienda, provisional, en el agro, la reforma administrativa, etc.

No obstante, la propia iniciativa de los sectores privatistas que logran entre 1978-79 impulsar este conjunto de reformas y que presionan por estabilizar *normadamente* al régimen genera efectos contrarios no anticipados. Lentamente va surgiendo en el interior de las FF.AA., especialmente del Ejército, una opinión que tiende a oponer resistencia a la total desestatización y vaciamiento político-económico del Estado.

La constitución de este sector también obedece a un doble cálculo político. Por una parte, la desestatización y neutralización económica del Estado transfiere el poder político desde la administración de los asuntos estatales hacia el capital privado. Esta transferencia no significa la eliminación de la política como inicialmente se pudo pensar. Más bien implica que gran parte de las decisiones sobre los asuntos públicos, que implicaban opciones políticas a nivel gubernamental, tienden a ser adoptadas por el capital privado. De esta forma se “privatiza” la política nacional.

Se podría ilustrar este punto indicando que la ausencia de actividad estatal en el campo de la vivienda, por ejemplo, no elimina *ipso facto* el problema político y nacional del déficit habitacional. Sin embargo, ahora la resolución de este problema ya no radica en opciones gubernamentales que tomen en consideración los intereses y capacidades efectivas de los sectores más afectados, sino que obedece fundamentalmente a criterios de rentabilidad. Evidentemente esta transferencia del poder político al capital privado contradice toda la ideología que legitimó institucionalmente la acción política originaria de las FF. AA.

Por otra parte, esta "privatización" de la política deja a las FF. AA. en cuanto instituciones gobernantes crecientemente enmarcadas en los criterios de maximización de utilidades del capital privado. Ello dice relación con el problema de la defensa nacional, pero principalmente afecta la autodefinición de la función social de las FF. AA. como gestoras de un nuevo orden socio-político. La proyección de las tendencias privatizantes deja a las FF. AA. institucionalmente al margen de las principales decisiones de carácter nacional subordinándose en la práctica al dictado de las utilidades.

Estas comienzan a tomar conciencia de su función en torno a la defensa de las riquezas básicas del país amenazadas por la privatización. Los casos del cobre, petróleo, acero y otros recursos naturales son expresivos de esta contradicción. Para las FF. AA. gobernantes y otros sectores actualmente subordinados en lo político a ellas (como podrían ser los antiguos sectores corporativistas) la total apropiación del capital social por parte de la empresa privada amenaza con borrarlos de la escena política nacional en el mediano y largo plazo.

De esta forma, tenemos que después de nueve años de gobierno militar en el interior del bloque dominante se oponen fuerzas que tratan de establecer límites diferentes para la actividad privada/estatal. Aun cuando esta tensión no está resuelta, la mera existencia de ella tiene importantes implicancias para la lucha política en este período.

Por una parte esto significa que la meta de transferir el poder político al capital privado se aleja en la medida que no se privatizan todas las palancas fundamentales de la economía nacional. Así, todo lo realizado a través de la devolución de empresas y otras medidas económicas no podría siquiera compararse con el control y poder político que significaría la propiedad privada del cobre, petróleo, acero y energía. Mientras

esta transferencia no se realice, todas las modificaciones efectuadas hasta la fecha tienen un carácter inestable y, por consiguiente, pueden ser en cierto grado reversibles.

Por otra parte, y en la medida que tal privatización no ocurra, los niveles de acumulación posibles del capital privado nacional son mucho más bajos que en el caso de lograr tales propósitos. En un contexto en el cual el crecimiento económico pasa fundamentalmente por el desarrollo del sector exportador, el control estatal de las principales vías de desarrollo hacia fuera impide un nivel y un ritmo de acumulación apto para proyectar a tales sectores como elementos capaces de hegemonizar efectivamente al conjunto de la sociedad chilena.

Si bien los impactos de las transformaciones en lo público y privado —incluyendo lo cotidiano— han sido numerosos, no podrán adquirir mayor estabilidad y permanencia si la lógica de constitución y funcionamiento del nuevo modelo no alcanza a inundar al conjunto de la sociedad chilena empapando a la totalidad de las actividades que en ella se desenvuelven. Aun cuando el actual nivel de transformaciones sociales “exuda” elementos ideológicos de importancia y amplios sectores sociales se adaptan a las nuevas condiciones incorporándose en mayor o menor medida a determinados tipos de prácticas sociales o complejos valóricos, la adhesión al sistema tiene la limitación de ser pasiva, y por lo tanto no pueden dejar de ser modos de vida reversibles en el momento que se presente una alternativa ideológico-política más poderosa.

Toda esta inestabilidad relativa se expresa políticamente en la permanencia del Comandante en Jefe del Ejército en la Presidencia de la República, contando como único marco institucional con el cambiante cuadro de alianzas en el interior del bloque dominante que tiende a fortalecer su posición individual. Cualquier intento hegemónico serio debería necesariamente superar tal situación, no sólo a través de una legitimación más amplia de las posiciones unipersonales, sino a través de la estabilización de un sistema de normas que permitan reproducir el sistema sin quiebres y tensiones agudas en cada uno de los momentos de cambio de los titulares, esto es institucionalizar una hegemonía social.

Este es sólo un ejemplo de la situación a que apuntamos, pero sintetiza de manera adecuada el conjunto de contradicciones que caracterizan al bloque gobernante: alianza dominante sin hegemonía clara por parte de ninguna de sus principales fuerzas constitutivas y sin perspectivas claras de legitimación universal de su proyecto.



LAS CONTRADICCIONES DE LA OPOSICION

En este marco político las posibles alianzas entre los principales elementos de la política nacional se rigidizan.

Un primer aspecto de importancia en este sentido son las limitadas posibilidades objetivas que tienen los principales sectores políticos (que expresan ciertas configuraciones clasistas) para articular alianzas.

Desde este ángulo de análisis las posibles alianzas de las fuerzas que podríamos denominar *privatistas* están actualmente limitadas a la mantención de su acuerdo original con las FF. AA. y la élite gubernamental mientras no se transfiera la mayoría del capital social del país a manos privadas. Por tales razones el "aperturismo" de tales sectores en el ámbito político está fuertemente condicionado por el nivel de acumulación que ellas logren en el campo económico, donde aún hay mucho terreno que ganar. Una breve comparación del sector estatal y privado en 1979, permite una mejor comprensión de este fenómeno.

Patrimonio y Utilidades del Sector Privado y Público: 1977-1979

(miles de US\$)

	Patrimonio		Utilidades	
	Sector Público	Sector Privado	Sector Público	Sector Privado
1977	5.079.800	1.433.200	58.820	105.330
1978	6.020.477	1.850.707	182.213	155.221
1979	7.717.016	3.221.218	593.725	349.249

Fuente: "Ercilla Económico", julio 1980.

No cabe la menor duda que desde el punto de vista de las fuerzas *privatistas* mientras no se logre transferir el cuantioso patrimonio y utilidades sociales acumulados hasta el momento su capacidad para establecer alianzas se ve limitada a la mantención del actual cuadro de dominación. El que este cuadro no

les permita alianzas más amplias y no les posibilite proyectarse hegemónicamente sobre el conjunto de la sociedad, sólo refuerza su opción de mantenerse contradictoriamente asociadas a un sector que si bien cuenta con el monopolio de la fuerza, no ofrece una alternativa económica diferente a la del "modelo". En consecuencia, el eventual aperturismo político de estos sectores sólo podrá operacionalizarse una vez que la transferencia del poder económico/político esté realizada a su favor. En ese momento el capital privado podrá aspirar a establecer y hegemónizar una alianza más amplia con sectores empresariales de menor nivel de acumulación y sectores medios. En estas condiciones el "aperturismo" de las fuerzas *privatistas* ya no hará peligrar sus posiciones de clase producto de una eventual reversión de su proceso de acumulación como sucedió entre 1970-73. Por su parte, los sectores que impulsan una delimitación más amplia del área del accionar del Estado, tanto en lo político como en las actividades económicas, llamadas para estos efectos "estratégicas", no tienen aliados posibles para incorporar a un proyecto de nueva forma de Estado. Desde este punto de vista sus limitaciones en materia de alianzas políticas los lleva a mantener al régimen en su forma actual y a generar tensiones con el sector privatista por la apropiación de fondos estatales destinados a crear una base política propia. Ambas limitaciones (falta de proyecto político-económico y actividad estatal tendencialmente creciente en una perspectiva pseudo-populista) lleva a estos sectores a concentrar su esfuerzo en la mantención de las posiciones unipersonales.

En el contexto de una alianza dominante sin hegemonía claramente decidida, las relaciones políticas de los opositores al régimen adquieren una gran provisoriedad.

Dos fuerzas principales se podrían identificar en el interior de la Oposición: el centro político expresado principalmente por la Democracia Cristiana; y la Izquierda expresada tanto a través de grupos y partidos que intentan nuevas formas de acuerdos políticos.

Desde los inicios del gobierno militar, la Izquierda ha insistido en la necesidad de un frente unificado que sustituya al actual régimen. Sin embargo, esta alianza política no ha logrado plasmarse hasta el momento. Diversos factores conspiran contra esta posibilidad dentro de los cuales destacaremos dos: la opción política de la DC por no materializar un acuerdo político con la Izquierda; y la incapacidad de esta última por desarrollar sus propias fuerzas y generar un frente social amplio en la base.

Es importante destacar que la opción política de la DC se encuentra fuertemente influenciada por el cuadro de transformaciones implementadas en los últimos años. Resulta evidente para tales sectores que la modernización capitalista realizada por el régimen de alguna manera era una tarea que tenía que efectuarse en el futuro. Igualmente importante es la constatación de que la reiteración de la estrategia simple de industrialización sustitutiva no responde a las posibilidades objetivas de la DC para impulsar un proyecto económico diferente, especialmente producto del cambio de los parámetros económicos internacionales y de la nueva inserción de la economía nacional en el sistema capitalista mundial. Reinserción que se consolida en el marco de las transformaciones realizadas y las políticas implementadas que aceleraron esta nueva forma de relación.

Desde este punto de vista el proyecto capitalista de desarrollo de la DC tiene que adecuarse a las nuevas condiciones del capitalismo mundial. En esta medida la DC *contiene* la posibilidad de una alianza con las fuerzas privatistas.

Sin embargo, la DC contiene al mismo tiempo un proyecto democrático, hoy día en fuerte contradicción con el gobierno militar. Tal proyecto pretende establecer las bases sociales para el desarrollo de un modelo capitalista que cuente con una legitimidad social y en el que sus "excesos" estén acotados por un orden normativo correspondiente.

No obstante, la DC se encuentra sometida a múltiples contradicciones entre las cuales se destaca la ausencia de una teoría que dé cuenta de las complejas y difíciles relaciones entre democracia y capitalismo en países en desarrollo bloqueado como los nuestros; una base social popular alineada ideológicamente con su proyecto democrático pero que tendencialmente se aparta de una opción capitalista que mantenga las mismas características del actual sistema; y una posición en la lucha política nacional que le permite establecer alianzas tanto con las fuerzas privatistas en la perspectiva de una apertura que limite los desbordes del "modelo", como una alianza con la Izquierda que le permita dar cuenta de la reivindicación democrática de su base popular.

En este contexto, las fuerzas sociales históricamente encuadradas por la DC se encuentran con que la operacionalización de ambos contenidos políticos no es posible de ser realizada con los propios recursos, y que cualquier sistema de alianzas, necesariamente implica contar con soportes de clases dife-

rentes, según el énfasis que se ponga en la realización de los contenidos económicos o en los requerimientos democráticos de su base popular.

Así el papel centrista de la DC termina restringiéndose a una equidistancia simple de sus potenciales aliados, más que convirtiéndola en un elemento articulador y moderador del conflicto social como en más de una oportunidad lo ha reivindicado.

Esta condición de equidistancia también está determinada por el bloqueo que enfrenta el sistema de alianzas políticas a nivel nacional. Mientras el proceso de transferencia del capital social al sector privado no esté consumado en su mayor parte, a la DC no le será posible una alianza con los sectores privatistas en torno a un modelo político que atenúe y modere los excesos del capitalismo financiero. Desde este punto de vista el problema que se le plantea a estos últimos es el plazo en el cual se podría materializar tal acuerdo. Mientras más tiempo pase y la mayor parte del capital social sea privatizado, mayor será la posibilidad de que los sectores privatistas hegemonicen una alianza política con la DC y un acuerdo de clase con sus bases de apoyo. Desde el punto de vista de la DC, mientras más pronto se pueda encuadrar el "modelo" en marcos institucionales democráticos, mayor será su posibilidad de limitar las aspiraciones privatistas de sus potenciales aliados.

En esta permanente tensión se entienden los flujos y reflujos en las relaciones entre ambos sectores. Igualmente, estas variaciones en más de una oportunidad se han constituido en presiones políticas que actúan sobre la cúpula gubernamental, la que reacciona acelerando su acción privatista cuando es amenazada por el peligro de una alianza más amplia o haciéndola más lenta cuando el peligro ha sido conjurado.

Esta inclinación por una alianza sectores medios/capital financiero, que se expresa políticamente en la tensión por un acuerdo DC/fuerzas privatistas, no tienen una alternativa de Izquierda que sirva de contrapunto referencial para la DC. La heterogeneidad en el interior de la Izquierda y la falta de frentes políticos propios que desplieguen una efectiva fuerza de masas la reduce a ser un contradictor de la política demócratacristiana más que a operar como foco de atracción de su dirección y de su base popular.

Desde este punto de vista, las principales limitaciones de la Izquierda que se podrían sintetizar en su insuficiente arraigo y movilización de masas, se expresa en el campo de las rela-

ciones políticas nacionales bajo la forma de un accionar cupular que no logra alianzas ni acuerdos políticos y que en esta misma medida no consigue desatar la fuerza democratizadora disponible en un arco político —ideológico mucho más amplio que el contenido en las organizaciones políticas existentes y su limitado sistema de posibles alianzas.

En la medida que la Izquierda no logra unificar y proyectar nacionalmente las reivindicaciones populares queda presa del rígido marco de alianzas políticas entre los partidos que la comprenden y entre éstos y las organizaciones de centro. Así, el posible sistema de alianzas entre los principales elementos de la política nacional queda rigidizado y reducido fundamentalmente a la alianza dominante.

Por estas razones, la reiteradamente denunciada situación de aislamiento del régimen y de ausencia de soportes de clase activos en el campo de lucha no implica necesariamente su creciente debilidad.

El que su proyecto económico y su práctica política e institucional ponga “objetivamente” al régimen en contra de la mayoría del país no implica que este aislamiento se traduzca en su desestabilización. Por el contrario, mientras, a la alianza dominante no se le oponga una alianza más amplia y capaz de movilizar a la masa “objetivamente” interpretada, difícilmente se podrá esperar un cambio en las actuales condiciones políticas.

La ruptura de esta rigidización del sistema de alianzas sólo podrá provenir de un despliegue de la fuerza de masas de la izquierda, la cual a su vez debe modificar un conjunto de limitaciones históricas para poder desempeñar adecuadamente esa función política.

En consecuencia no es de extrañar que cuando el sistema de alianzas posibles en el interior de las fuerzas opositoras enfrenta tal rigidización surjan cursos de acción violenta que obedecen a una táctica de minoría política. El que esta táctica pueda servir de camino para constituir mayorías nacionales es controvertible, pero ilustra de buena forma la difícil constitución de alianzas mayoritarias y los efectos que tiene este problema en el interior de las fuerzas opositoras.

LA CRISIS DE LA IZQUIERDA

En un marco de rígidas y complejas relaciones entre los principales elementos de la política nacional, los problemas de

la Izquierda adquieren mayor relevancia. De igual forma, su superación requiere de la comprensión de las causas más importantes de la actual crisis que enfrenta.

Una primera causa de esta crisis radica en el drástico, masivo y profundo cambio en las bases de la organización social chilena. Estos cambios se han dado en el ámbito económico al alterarse los ejes de acumulación vigentes por más de cuarenta años: actividad económica estatal e industrialización protegida; han alcanzado la estructura social cambiando la situación de vida e intereses inmediatos de cada grupo social; han impactado las estructuras ideológicas al destruirse determinados complejos valóricos y al restringirse la capacidad para regenerarlos; han llegado a afectar las estructuras más privadas de la vida cotidiana (familia, pareja, sociabilidad) además de las obvias alteraciones en el campo de la política.

Los cambios más importantes que dicen relación con la crisis política de las fuerzas de izquierda se encuentran tanto en la alteración de los ámbitos de constitución de la propia política, como en la situación de vida de cada uno de los grupos y clases sociales potencialmente movilizables.

En este contexto de cambios, los diversos grupos sociales deben adecuar sus formas de vida y sobrevivir de acuerdo a las nuevas reglas impuestas.

Desde el punto de vista de las diversas clases sociales ellas ven redefinidas sus condiciones de reproducción. Los sectores propietarios que sobreviven lo hacen sobre la base de su adecuación al nuevo eje de acumulación financiera, acentuándose la concentración y centralización de la propiedad en cada uno de los niveles y sectores de acuerdo con sus peculiares características. La masa propietaria ve disminuido su tamaño relativo en favor del fortalecimiento de grandes conglomerados.

Las clases medias, vistas por algunos como soportes de una estabilidad política, se comienzan a diferenciar distanciándose los sectores de mayores ingresos de los más desfavorecidos en todos y cada uno de los campos de la actividad nacional. La proletarianización de muchos y el incremento de niveles salariales de pocos polariza a un importante sector de la sociedad chilena.

Los sectores asalariados ven alteradas sus condiciones de vida. La reducción del número de ocupados y de las ocupaciones tradicionales genera nuevas categorías laborales que adoptan inéditas estrategias de sobrevivencia y dan lugar a

una nueva estructura del empleo. En suma, las condiciones de vida y las bases de constitución de los diversos grupos y clases sociales han sido modificadas.

Ello ha tenido por efecto la destrucción de la tupida red de organizaciones sociales de masas que expresaban sus intereses históricos. En un contexto represivo que las destruye materialmente, tales transformaciones han implicado que las organizaciones sociales preexistentes que han logrado sobrevivir pierdan representatividad dejando de ser expresivas de los sectores sociales allí convocados. No se trata de un simple divorcio entre organizaciones cupulares (partidos, federaciones, confederaciones, colegios, asociaciones, etc.) y la base. Se trata de la destrucción del propio tejido de organizaciones sociales de masa, de la ruptura de las relaciones entre dirigentes y base, del quiebre de las relaciones de las organizaciones entre sí. De esta forma se destruyen las bases organizacionales del conjunto de los movimientos sociales que impulsaron mayores niveles de democratización en el país.

La sociedad civil chilena se caracterizó por tal riqueza y pujanza de sus organizaciones de base que logró constituir movimientos sociales con vida propia, entes organizados que cualquiera fuera su signo ideológico podían plantearse nacionalmente. Hoy día los que quedan apenas pueden reconocer su propia realidad. En consecuencia, es preciso aceptar que no existiendo este conjunto de organizaciones, ni existiendo la posibilidad de su simple reorganización sobre bases idénticas o parecidas a las del pasado, difícilmente se puede expresar nacionalmente una conciencia gremial-corporativa tan diversificada. Mucho más difícil es plantearle alternativas de cambio político cuando esta aún no emerge.

Por tales razones las alternativas políticas que hoy día se barajan en el interior de la Izquierda no podrán contar con apoyos de masas mientras ellas no correspondan a una nueva organización de base, a un movimiento social compuesto de organizaciones conscientes de sus nuevos intereses y de la forma como ellos se pueden realizar a través de cambios de carácter global. La crisis de las organizaciones políticas de Izquierda se caracteriza por el divorcio y desconocimiento de esta nueva realidad social. En tal contexto sus diferencias carecen de significado nacional al no ser expresivas de proyectos alternativos originados en el seno de cada grupo fundamental. Así, las cúpulas políticas y gremiales actúan sobre un espejismo de sociedad civil organizada imputándole intereses políticos de carácter na-

cional. De esta forma, algunas propuestas políticas aparentemente razonables son incapaces de traducirse en efectiva movilización.

Lo más grave en esta situación es la ausencia de conciencia sobre este problema en el interior de las direcciones partidarias de la Izquierda chilena. Estas continúan con una actividad opositora que afirma una voluntad de cambio sin tomar en cuenta las condiciones sociales para que esta voluntad se transforme en cambios efectivos, sin cuestionarse la vigencia de sus plataformas, métodos de lucha, objetivos a lograr.

Este divorcio entre partido y realidad social ha tenido por resultado una autorreferencia organizacional que la mera represión gubernamental ya no justifica. En este ensimismamiento político los problemas nacionales se dan por resueltos en la medida que satisfacen algunas condiciones del discurso organizacional o algunos parámetros del pasado. Para ellos cualquier solución "lúcida" debe tener efectos pertinentes. El que así no ocurra no es visto como un problema de inadecuación entre dirección política y realidad, sino como una incapacidad partidaria para inundar a la sociedad toda de una "teología política" determinada. En consecuencia, las soluciones tienden a poner los énfasis en aumentar los esfuerzos y los recursos, en reincidir en métodos y acciones sin cuestionar su contenido ni al sujeto político que los define.

La esterilidad de esta concepción de la política —constatación realizada bajo el rubro de crisis teórica— ha significado que la gran "capacidad democrática instalada" de la Izquierda no haya podido ser plenamente desatada.

Esta idea de partido político como "estado mayor de la revolución" tiene fundamentos teóricos desarrollados a niveles de exageración en la concepción stalinista de partido obrero. Sin embargo, más allá de la concepción o teoría que le da fundamento a esta forma de actuar, la causa no ideológica más importante que la explica sociológicamente radica en su histórico accionar político como minoría social.

No cabe la menor duda que las fuerzas expresadas políticamente por la Izquierda fueron minoritarias durante largas décadas en la sociedad chilena. En ese contexto, la única manera de amplificar su presencia fue accionar con la lógica —leninista— de una minoría que está presente como actor político en las más variadas situaciones. Esta práctica política desarrolla capacidades dirigentes aptas para coordinar, a través de escasos recursos, una variedad de expresiones de masas. Sin em-

bargo, en esta misma medida las organizaciones de izquierda si bien quedan momentáneamente a la cabeza de éstas difícilmente se podría decir que se "nutren fundamentalmente de ellas". De esta forma las relaciones se invierten y estos partidos más que ser expresivos y articular la diversidad de la práctica social de masas tienden a convertirse en "estados mayores" que dirigen una operación política diversificada en muchos frentes de lucha.

Esto ha llevado a los partidos de izquierda a entrar rápidamente en contradicción con su base social en la medida que no siempre los intereses corporativos expresan de manera adecuada las necesidades políticas del momento, ni las opciones políticas nacionales se adecuan plenamente a las necesidades gremiales-corporativas. Así, la lógica de minoría cobra sus propias víctimas.

En el fondo de esta contradicción existe una noción aún intocada por las nuevas condiciones, tal es la idea de que para representar una base social, a un grupo o clase, basta la mera declaración de voluntad y afirmación de determinados principios. En otras palabras, los partidos de la Izquierda chilena tienden a constituirse como expresiones políticas de un sujeto histórico trascendente a través de la operacionalización de un "modelo" de partido pre-existente. En un contexto de escasos mecanismos de validación política esta definición del rol partidario muchas veces alcanza niveles superiores de exageración.

Este sesgo de la Izquierda en el país tiene una larga tradición en la medida que sus partidos se han constituido históricamente a partir de determinadas organizaciones o movimientos sociales de base. Sin embargo, pronto se tiende a expropiar a estas organizaciones de su ser político-gremial. A vaciar sus horizontes de movilización de necesarios e inevitables particularismos, en beneficio de marcos de referencia político-nacionales.

Tal situación se ha observado permanentemente en las relaciones entre los partidos de Izquierda y las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y universitarias para mencionar los ejemplos más destacados. En el momento que se constituye un segmento autónomo de masas las organizaciones partidarias tienden a inundarlo, producto de una concepción política que le asigna al partido el papel dirigente de toda movilización social.

En la medida que cada una de las organizaciones de base es tensionada a proyectarse directamente en términos políticos y

nacionales, es necesario resolver el conjunto de contradicciones que surgen de esta compleja interacción. Una de las fórmulas más socorridas para lograr la unidad de los contrarios es cohesionar a organizaciones y partidos en una "teología política" que resuelve ideológicamente tales contradicciones, pero que no da realmente cuenta de ellas. Por estas razones, desde la perspectiva partidaria, inevitablemente se tiende a poner el énfasis en el desarrollo organizacional más que en el sistema de alianzas políticas; en el desarrollo de una "teología partidaria" más que en la comprensión de la realidad a ser transformada; en el control más que en la hegemonía. Un sistema de acción de este tipo termina por conspirar contra los propios objetivos de cambio social al aislar a las direcciones de la base y al conjunto partidario del resto de los actores políticos potencialmente articulables en términos nacionales. La conciencia gremial-corporativa, momentáneamente sacrificada en aras de nociones políticas de nivel superior termina por sepultar posibles proyectos de carácter nacional. Esta situación se agudiza en las actuales circunstancias.

Hoy día, al estar cuestionados los términos de existencia de la propia sociedad civil, los partidos de Izquierda continúan definiéndose como representativos de un sujeto histórico que no es el mismo. Incluso la emergencia de algunas organizaciones políticas que se fundamentaron como representativas de nuevas capas o sectores emergentes en el interior de las clases fundamentales no cuestionan su propia representatividad. Se constituyen así en entes trascendentes, ahistóricos, en proto-sociedades que defienden su individualidad y que la fundamentan en una inexistente "revelación de clases". Su unidad tiende a constituirse más que en torno a las posibilidades y proyectos de transformación de las condiciones políticas nacionales (que terminan siempre por desmerecerse), al interior de un supuesto discurso de un ente político ideal que se "encarna" de mejor o peor modo en determinadas formas partidarias. Así, al intentarse la unidad de los partidos de Izquierda exclusivamente a través de estas vías se trata de cuadrar un círculo, de resolver una aporía que proyecta al esfuerzo unitario por caminos extraviados.

Los partidos políticos de la Izquierda divididos entre sí y preñados de contradicciones en su seno terminan por ver disminuidas sus funciones sociales. En un sistema político donde no tienen cabida, su tradicional accionar político les impide desempeñar una función opositora eficaz. Para que esta función

pueda ejercerse es necesario que los caminos para las transformaciones propuestas, surjan de un tejido organizacional de nuevo tipo.

Cuando exista un movimiento de masas organizado, cuando se establezcan acuerdos y alianzas con bases sociales reales, cuando se redefina el cuadro de expresiones políticas nacionales, será posible ver una escena partidaria de Izquierda con posibilidades de converger. Ninguna nueva "buena idea" podrá alterar la situación antes descrita si no se constituye como expresión refinada de intereses sociales compartidos. Así, tal como en la actualidad la Izquierda trata de expresar una realidad inspirándose en una vieja y borrosa postal, el enfatizar una suerte de rol "profético" de las organizaciones partidarias puede terminar inspirando su acción en un espejo.

La necesidad de reconstituir el tejido de organizaciones sociales y la unidad de los soportes de una sociedad democrática pasa hoy día por la unidad de lo *popular* manifestada a través de la amplia gama de expresiones democráticas. Este objetivo rebasa con creces las actuales potencialidades políticas de la Izquierda local.

Por ello, su redefinición en el interior de un movimiento de masas es una función que sólo ella puede realizar y que al hacerla realidad puede cambiar el marco de limitaciones políticas de la Oposición.

La *unidad* de lo popular sólo puede constituirse, en las actuales circunstancias, en el interior de una red de organizaciones sociales de masas a la cual se le ha devuelto su capacidad de decisión política. Esta devolución más que un acto simbólico se transforma en una precondition para fundamentar un nuevo proyecto democrático y de izquierda.

El carácter de izquierda de un proyecto político popular está dado por la profundidad de las transformaciones democráticas impulsadas por un nuevo sujeto histórico-social. La conciencia política, la noción de conjunto sobre la sociedad, sólo puede surgir de una conciencia que parta reconociéndose a sí misma como socialmente constituida a partir de expresiones gremiales-corporativas y en las actuales condiciones éstas no difieren sustancialmente entre sí. Su diferenciación política más que responder a cuestiones sustanciales, obedece a la inercia de las estrechas divisiones partidistas. En otros términos, cuando la unidad democrática popular sea una necesidad generalizada en la base social será posible encontrar aquellas organizaciones políticas que mejor la expresen.

Los diversos intentos de recomposición del frente político de la Izquierda no reflejan otra cosa que esta gran necesidad de renovación. Sin embargo, mientras estos esfuerzos continúen unilateralmente puestos en los niveles cupulares no podrán alterar significativamente el cuadro de la Izquierda y, en consecuencia, no se podrán proyectar nacionalmente. Igualmente la renovación necesaria en el campo de masas si bien sólo puede partir del actual cuadro de organizaciones sociales de base, requiere de cambios fundamentales en la forma y contenido de su accionar. El recoger el estado de conciencia de la base y su capacidad de movilización, bajo estas nuevas condiciones es uno de sus más grandes desafíos.

ALTERNATIVAS DEMOCRATICAS

La existencia de una alternativa democrática posible y eficaz depende en definitiva de la capacidad de la Izquierda para establecer una amplia alianza de clase a nivel del movimiento social y su formalización en términos de un proyecto de sociedad avalado políticamente.

El consenso constituido en torno al mínimo común denominador de las organizaciones políticas opositoras ya no basta para dar lugar a una nueva alternativa política, ni cuenta con la suficiente fuerza como para cambiar el actual régimen.

Este aspecto del problema presenta nuevas dificultades. Es preciso reconocer que una alternativa política no sólo lo es para quienes la formulan, sino que además debe serlo para quienes apoyan al régimen que se quiere superar. Si bien el gobierno militar se mantiene en última instancia por la ausencia de una alianza opositora, *también* se mantiene porque hay fuerzas armadas que lo apoyan y que pueden mantener la actual situación.

Tales fuerzas tienen un grado determinado de homogeneidad y una clara hegemonía en su interior. Cualquier cambio de la actual situación requiere que la eventual alianza opositora, en la medida que no puede eliminar a tales soportes, logre una tan importante presencia en su seno que revierta su apoyo al régimen y lo recanalice hacia un proceso de democratización real.

En segundo lugar, una alternativa democrática, supuesta la resolución del problema de su arraigo social, necesita establecer una relativa simetría entre su proyecto político nacional y las acciones cotidianas de cada uno de sus componen-

tes, ligar la vida cotidiana de cada ciudadano con el esfuerzo global de democratización. Una alternativa democrática debe resolver los problemas que hoy día enfrenta la táctica opositora desarrollando un conjunto de fórmulas capaces de ser compartidas por esa totalidad, aptas para producir los resultados esperados.

Puesto que hasta el momento ningún régimen militar ha caído con la mera expresión de voluntades, el accionar opositor debe resolver el asunto de las formas específicas de lucha, ligar estas formas con el proyecto que aspira realizar y constituirse en mayoría política y social.

Un tercer problema que enfrenta una alternativa democrática es que más allá del acuerdo sobre las formas políticas a ser implementadas y los métodos de lucha a ser impulsados, ella requiere un nuevo acuerdo acerca de las características del proceso económico social de futuro.

Durante el período de vigencia democrática, la alianza política y los acuerdos de clases se estructuraban en torno a las condiciones que permitirían reproducir un marco de desarrollo nacional, estrategia que se suponía compartida. Las alternativas de acuerdos políticos que se barajaban para asegurar su éxito, decían relación con los énfasis de clase que se ponían en este proceso, pero el marco general no era objeto de un cuestionamiento radical.

La situación actual es diferente. Hoy día es necesario partir desde más atrás. Es necesario un acuerdo acerca de la estrategia de desarrollo global posible de ser implementada, esto es de los nuevos roles que cada actor social y de clase puede jugar y está *dispuesto* a hacerlo. En la medida que el conjunto de la sociedad se ha trastocado, es necesario establecer cuáles son los nuevos intereses de los actores organizados fundamentales. Este es un argumento adicional para reiterar el necesario concurso de organizaciones sociales de base en esta redefinición. Difícilmente alguien puede dar cuenta de los actuales intereses y reales disposiciones de tales actores para establecer un nuevo acuerdo económico-social.

En la medida que se ha alterado drásticamente y profundamente el horizonte histórico real del conjunto de los actores sociales, también es preciso reconocer que se ha alterado el pasado haciendo imposible una vuelta atrás. Se han eliminado así las posibilidades de que sobre esas bases se funde una nueva alternativa política viable. Por ello, un nuevo acuerdo económico-social es un elemento crucial en la posibilidad que tienen las

fuerzas opositoras para interesar al conjunto del país en sus proposiciones y al mismo tiempo incorporar a parte de los soportes del actual régimen.

DEMOCRACIA Y SOCIALISMO

El descongelamiento del sistema de alianzas a partir de una nueva fuerza de izquierda implica que ésta juega su papel político con un claro perfil de su proyecto histórico, so pena de neutralizarse con foco de atracción político.

Por estas razones, tal como la Oposición no puede esperar la democracia para luchar por ella, tampoco la Izquierda puede esperar al socialismo para construir sus premisas. Estas son esenciales a su propio ser político y de ellas depende su fuerza.

La llamada "democracia burguesa" si bien no fue una concesión burguesa, tampoco puede constituirse en el punto de llegada de un movimiento de emancipación democrática. El carácter burgués de esa democracia denotaba sus limitaciones y sus propias inconsecuencias. Si bien la democracia vivida hasta 1973 no fue la democracia a la que muchos aspiraban, ella no se constituía en una negación de tales aspiraciones. Aun cuando no fue un producto extraño a las luchas populares, difícilmente se podría decir que fue su obra maestra. Más bien fue un punto de partida en un largo camino de profundizaciones democráticas.

Si cada actor social necesita que la distancia entre la toma de decisiones nacionales y su propia realidad social sea mínima y si este actor es una mayoría social, estamos en presencia de una fuerza democrática que puede proyectarse en términos socialistas desde el momento de su afirmación democrática.

En la medida que el nuevo sujeto histórico de izquierda logre a su vez ser sujeto político nacional necesitará tener su destino en sus propias manos. Por lo tanto, su tendencia será de minimizar las distancias entre lo civil y lo político. Ello como requisito para su propia autoafirmación como actor social.

Desde este punto de vista, la democracia burguesa tenía limitaciones y fronteras intraspasables. Mencionando algunas se podría indicar, por ejemplo, la dominación de la mujer en el conjunto de la sociedad; las limitaciones al control del uso de la fuerza armada; las imposibilidades de acceso a los medios de comunicación social; la falta de control de las acciones de gobernantes y legisladores; el limitado acceso a la educación, salud, vivienda, etc. En la medida que estas limitaciones eran

producto de voluntades políticas explícitas, tal democracia se convertía en un ente contrahecho, impotente para resolver sus principales limitaciones y desafíos.

Así, la "democracia burguesa" fue el producto de la lucha de los reales interesados en la democratización social y de los límites impuestos por quienes no lo estaban.

La Izquierda que afirme la vigencia de los valores democráticos como adquisiciones inembargables del desarrollo de la humanidad en su conjunto (Declaración Universal de los Derechos Humanos) podrá asumir al socialismo como una profundización de estas libertades, como la consolidación de sus garantías. Igualmente importante es la construcción de las condiciones materiales que permitan un efectivo goce y realización de estas libertades a nivel social.

En esta doble complejidad la Izquierda encuentra su *punto de constitución* y su fuerza política. En la medida que sus propuestas de carácter nacional están impulsadas por la necesidad de ampliar los límites materiales e institucionales para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes puede aspirar a constituirse en mayoría. Esta dinámica que caracteriza a un movimiento popular emancipador implica una amplia participación de sus bases constitutivas tanto en la afirmación de sus libertades, como en la construcción de las condiciones materiales de ella. Desde este punto de vista, sólo la participación en este proceso puede convertir la autolimitación y autocotamiento de sus integrantes en un efectivo acto de afirmación de su propia libertad. Al postergar y adecuar la plenitud de sus derechos en función de la construcción de la base material para ello, el movimiento popular puede asumir la responsabilidad del todo social y universalizar efectivamente su propio proyecto.

De esta forma, la democracia socialista que puede impulsar la Izquierda en Chile supera no sólo las limitaciones materiales e institucionales que ha tenido la democracia históricamente observada en el país. Además puede superar las limitaciones institucionales e interdicciones que ella sufre en otras experiencias socialistas.

La Izquierda que logre fundamentarse sobre la base de esta política; que con ella logre arraigo y se alimente de bases sociales organizadas; que a partir de ellas formule alianzas políticas nacionales e internacionales; horizontes posibles a través de un nuevo proyecto de sociedad, podrá convertirse en el sujeto político capaz de eliminar el mayor número de vallas para el pleno ejercicio de su libertad.

Enero, 1981